

C.A. de Concepción.

Concepción, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.

VISTO:

A folio 1 comparece Pablo Millán Barría, Abogado de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con domicilio para estos efectos en calle Lincoyán N°255 Concepción, en representación, de don ALEXANDER CASTILLO EREU, BARBERO, de nacionalidad venezolana, número de cedula extranjera de identidad V 17.825.784, con domicilio en Almagro N°1579, comuna de Los Ángeles, Región del Biobío quien interpone acción constitucional de amparo preventivo en contra de la Orden de Expulsión del país decretada a través Resolución Exenta número 209, de fecha 2 de Febrero de 2021, por Ministerio del Interior y Seguridad Pública a través de su autoridad doña Carolina Tohá Morales, y a la Delegación Presidencial Regional del Bío-Bío a través de su autoridad doña Daniela Dresdner Vicencio, y que fuera notificado a su representado con fecha 20 del mes de Octubre del año 2022, con costas, solicitando acoja y en definitiva restablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto dicha expulsión por ser contraria a derecho.

Señala que su representado tomó la difícil decisión de salir de su país Venezuela, junto con su esposa, por la precariedad y decadencia de la vida. Ambos trabajaban, pero no les alcanzaba el dinero para sostener el hogar donde vivían con sus padres y hermanos menores, por lo que optan por vender las pocas cosas de valor que tenían y venirse a Chile, refiere que su representado junto a su esposa, tomaron la decisión de que ella se viniera a Chile en enero del 2019 y mi representado se quedara en Venezuela trabajando, para poder seguir ayudando a sus padres y a sus suegros mientras su esposa lograba



estabilizarse en nuestro país, ya que ella tenía amistades que estaban dispuestos ayudarla con alojamiento y búsqueda de empleo para de esa manera pudiera enviarle dinero al recurrente y poder cubrir los gastos de su familia y, a su vez, reunir dinero y enviarle los pasajes para su reencuentro en Chile y juntos poder seguir aportando económicamente a sus hogares en Venezuela,

Agrega que en julio del año 2019 el Gobierno Chileno limitó la entrada a nuestras fronteras de extranjeros, rompiendo el acuerdo Mercosur que tenían los pueblos de América del Sur de poder ingresar a Chile con Cédula de identidad del país de origen, incluidos los ciudadanos venezolanos, comenzando a solicitar pasaporte y visa para poder ingresar al país. Por lo que ya todos saben, en el país de Venezuela cuesta muchísimo tiempo y dinero sacar pasaporte, documento de vital importancia para los viajes, al no poder obtener pasaporte y visa en Venezuela por el tiempo y dinero del trámite, viendo truncado su sueño de poder reunirse con su esposa y resignado a seguir viviendo en la miseria de su país, fue que en enero del año 2020 su esposa le comenta que en Chile sus amistades le comentan que inmigrantes están cruzando el desierto para poder llegar a Chile sin pasaporte ni visa, que en el momento era la única opción de entrar al país y una vez dentro poder realizar una serie de trámites para intentar una estadía segura y permanente dentro del país. Por lo que decidió arriesgarse y cruzar la frontera, con ayuda del dinero que su esposa le envió a Venezuela; sale de Venezuela a inicios del mes de febrero del año 2020 llegando a Perú, cruzó el desierto con más personas que encontró en el camino, llegando a la ciudad de Iquique en Chile. En Iquique compra pasajes a Santiago y desde ahí emprende su viaje con destino a Los Ángeles en la región del Bío-Bío, reencontrándose con su esposa el 16 de febrero del 2020.

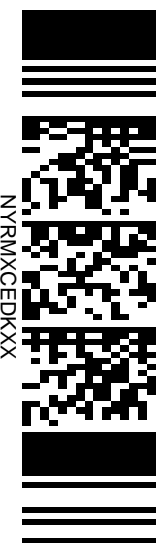
Refiere que al día siguiente consciente de su estadía irregular y con el fin de legalizar su permanencia en nuestro país, se acerca a



oficinas de la Policía de Investigaciones para manifestar haber ingresado a nuestro país por paso fronterizo no habilitado, procediendo a tomarle declaración y solicitándole que se presentara en dichas oficinas todos los meses, lo cual ha cumplido a cabalidad. En Los Ángeles logró conseguir trabajo dentro de una barbería, desempeñándose como barbero. En octubre del año 2021, luego de ahorrar dinero junto a su esposa, logran abrir un local comercial destinado como salón de belleza donde ambos desempeñan sus labores, en diciembre del 2021 se entera de que serán padres, llevando su esposa un embarazo de alto riesgo que le imposibilitó trabajar y llevar constantes controles en Cesfam y Hospital. Su hijo nace el 06 de julio del 2022 con buen estado de salud, pero en agosto dan cuenta los doctores que su hijo Aaron Isaías Castillo Liscano, presenta alergias alimentarias a la leche de vaca, soja y gluten, por lo que su esposa se dedica exclusivamente al cuidado de su hijo, contando solamente con el sueldo del recurrente.

Que el día 20 de octubre del presente año es notificado de la carta de expulsión, que la eventual expulsión Ruego tomar en consideración, que la eventual expulsión sería perjudicial para su familia que hoy en día reside en Chile de manera regularizada, ya que es responsable de su hogar aquí en Chile y de su familia en Venezuela. Que mediante este acto viene por rogar su estancia en el país con la finalidad de luego regularizar su visa y pasaporte a través de instituciones que lo han estado guiando en ello, demostrado en su comparecencia personal ante la Policía de Investigaciones reconociendo su ingreso al país por paso fronterizo no habilitado para ello.

Con fecha 2 de febrero 2021, se decreta orden de expulsión por el MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA, representado por el Ministro del Interior, a través Resolución Exenta número 209/2021, por Ministerio del Interior y Seguridad Pública a

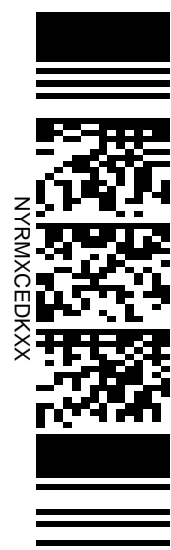


través de su autoridad doña Carolina Tohá Morales y que fuera notificado con fecha 20 de octubre de 2022 al recurrente.

Continua señalando previas citas legales que en el caso de autos la garantía de libertad ambulatoria, ha sido absolutamente vulnerada en virtud de un acto administrativo manifiestamente ilegal, ya que la Resolución Exenta número 209/2021 del MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA, representado por su autoridad doña Carolina Tohá Morales, Orden de Expulsión del país decretada a través Resolución Exenta número 209/2021, notificada con fecha el 20 de octubre de 2022, que ordena el abandono del país a don ALEXANDER CASTILLO EREU, es un acto que restringe derechos y garantías, consagrados tanto en la Constitución Política de la República de Chile como en Tratados Internacionales, toda vez que impide que los amparados puedan desplazarse libremente por este país, además de restringírsele la posibilidad de salir de un territorio con el fin de retornar libremente a él.

Por otro lado señala que también señalar que, en el caso concreto, existe una vulneración al derecho fundamental de la integridad física y psíquica, esto debido a como se explicó en los puntos anteriores el ser devuelto a Venezuela provocaría que quede expuestos a todas la represalias ya vividas anteriormente sin contar la enorme represalias que se impondrán al volver a chile ya explicadas anteriormente.

En los hechos, la orden de expulsión se dictó sin que se haya garantizado el principio de contradictoriedad, es decir, sin haberse otorgado al sancionado el plazo razonable para preparar su defensa y responder adecuadamente, ni la oportunidad para producir y refutar pruebas. De hecho, no existió siquiera la apertura de un término probatorio, en los términos del artículo 35 de la Ley 19.880, que haya



permitido al amparado aportar pruebas con el objeto de acreditar la buena fe de su actuar.

Finaliza solicitando tener por interpuesta Acción Constitucional de Amparo en contra de la Orden de Expulsión del país decretada a través Resolución Exenta número 209/2021 por Ministerio del Interior y Seguridad Pública a través de su autoridad doña Carolina Tohá Morales, y que fuera notificado a mi representado con fecha 20 de Octubre de 2022, darle tramitación y en definitiva acoger el recurso de amparo interpuesto a favor de don ALEXANDER CASTILLO EREU, dejándose sin efecto la Resolución Exenta número 209/2021, con fecha 20 de octubre de 2022, revocando la orden de expulsión dictada en su contra y ordenando se proceda a la regularización migratoria del amparado.

A folio 5 se emite informe por parte DANIELA DRESDNER VICENCIO, funcionaria pública, Delegada Presidencial Regional, Región del Biobío, señalando que la resolución exenta que dispuso en su oportunidad la medida administrativa de expulsión, por no cumplimiento de los requisitos de ingreso que establece el Decreto Ley N° 1094 y su Reglamento, vigente en su momento, correspondió a una medida administrativa establecida por la legislación para un extranjero que haya contravenido la normativa vigente al haber ingresado al país habiendo eludido los controles fronterizos migratorios obligatorios.

Agrega que la resolución exenta que dispuso la expulsión de un extranjero no es un acto administrativo de carácter ilegal, ya que la autoridad, al decretarla, ejerce el mandato que le confiere la ley. En este caso, se dispuso administrativamente la expulsión de una persona que ingresó a Chile, vulnerando las normas existentes en materia de extranjería, QUE A LA FECHA SE ENCONTRABAN VIGENTES, una de las cuales es el artículo 6 del entonces Decreto Ley N° 1.094, desde ahora en adelante “Ley de Extranjería” y Decreto Supremo N°



597, desde ahora en adelante “Reglamento”, el cual indicó que la entrada al país de los extranjeros debe realizarse “por un lugar habilitado, con documentos idóneos y sin que existan causales de prohibición o impedimento para ingresar”, correspondiendo a esta autoridad dar cumplimiento a dicho imperativo legal sancionar una conducta contraria a derecho, la cual se informó por la autoridad policial respectiva. La Ley de Extranjería y su Reglamento entregaron facultades a la autoridad para regular el tránsito de los extranjeros dentro y fuera del país, así como también establecer requisitos para ingresar al territorio, señalando que “el ingreso y el egreso de los extranjeros deberá hacerse por lugares habilitados del territorio nacional” (Artículo 3° de la Ley de Extranjería).

Refiere que la expulsión, en definitiva, es una de las medidas administrativas establecidas por la legislación migratoria ante la inobservancia de la misma, siendo causal suficiente de expulsión el ingresar al país de manera clandestina, según lo dispuesto en los artículos N° 2, 15 N° 7, 69 de la Ley de Extranjería y artículos 6, 7, 146 y 158 del Reglamento de Extranjería. Por lo tanto, acreditada la absoluta irregularidad en que se encontraba el extranjero, esta autoridad en pleno uso de sus facultades y atribuciones, resolvió su expulsión, en atención a los artículos 69 y 78 de la ley de extranjería y a los artículos 146 y 158 del Reglamento, sin que dicha medida pueda calificarse de desproporcionada o arbitraria según lo señala la recurrente.

En este sentido la medida de expulsión no solo fue dictada por la autoridad competente, basada en causal legal y dentro de la esfera de las atribuciones que la ley le confiere, sino que previo un estudio de los antecedentes tenidos a la vista, la declaración del inculpado, la confirmación por parte de Policía de Investigaciones de la falta de registro de ingreso, entre otras diligencias, lo que ha llegado a demostrar que el hecho existe, que existe una participación del



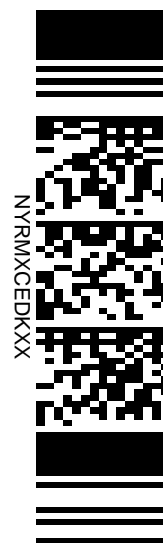
recurrente en éste y que, en consecuencia, corresponde aplicar la medida dispuesta en el ordenamiento jurídico para estas situaciones.

Finalmente, al momento de interponer la medida, se le ha comunicado al extranjero los derechos que le asisten así como los recursos que puede interponer en contra del acto administrativo respectivo, por lo que no es efectivo lo que señala el recurrente en su libelo en el punto 3).

Continúa señalando que el procedimiento seguido por la autoridad administrativa de la época para decretar la expulsión en contra del recurrente fue adoptado conforme a la normativa vigente de la época, a saber, el D.L. 1.094 y su reglamento D.S. 597. La norma mencionada no prescribía la existencia de una condena penal previa para la aplicación de la sanción a quien ingrese al territorio nacional sin dar cumplimiento a las exigencias legales migratorias. Cabe agregar que en la mayoría de los países, la medida de expulsión por ingreso irregular es incluso de ejecución inmediata.

Finalmente, reitera lo ya señalado por esta parte, en el sentido que la expulsión administrativa se dictó en el marco de una antigua ley migratoria, que ya no se encuentra vigente. No obstante, se encuentran vigentes todas las herramientas procesales administrativas para la adecuada protección y ejercicio de los derechos del recurrente, quien, a la fecha, no ha hecho presentación alguna ante esta autoridad regional.

A folio 4 JOSÉ IGNACIO RAMÍREZ MORRISON, abogado, en representación del MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, señalando que con fecha 20 de abril de 2021, se publicó la Ley N° 21.325, de Extranjería y Migración, cuyas disposiciones entraron en plena vigencia el día 12 de febrero de 2022, cuando se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo N° 296, de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprobó el Reglamento de dicha ley, de acuerdo a lo establecido en el artículo



undécimo transitorio, de la Ley N° 21.325. Que, en este contexto, el artículo 156 de la citada ley creó el Servicio Nacional de Migraciones, como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, otorgándole competencias sobre diversas materias de migración y extranjería. Específicamente, de acuerdo al numeral 7, del artículo 157, de la citada ley, le corresponde a dicho Servicio el determinar la expulsión de los extranjeros conforme a las disposiciones de la Ley N° 21.325, sin perjuicio de la facultad del Subsecretario del Interior de decretar esta medida de manera excepcional, y solo en casos debidamente calificados en que por razones de seguridad interior o exterior -que no es el caso de autos- (art. 132 de la Ley de Extranjería y Migración). Por su parte, el artículo 178, de la misma ley, establece expresamente que el Servicio Nacional de Migraciones, en el ámbito de las funciones y atribuciones que le otorga esta ley, será considerado para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones.

Finaliza señalando que, en consecuencia, corresponde que la materia de autos sea informada por el Servicio Nacional de Migraciones, conforme a sus competencias legales y a su calidad de continuador legal, para estos efectos, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 21 de la Constitución Política de la República, consagra la acción de amparo y dispone que: “Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de



inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”.

En el inciso tercero de dicho precepto se señala que “El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”.

SEGUNDO: Que conforme a lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto Ley N° 1094, del Ministerio del Interior, Ley de Extranjería y el artículo 146 del Decreto N° 597, que contiene el reglamento de la ley antes citada, “los extranjeros que ingresen al país o intenten egresar de él, clandestinamente, serán sancionados con determinadas penas, las que varían según el ingreso se haya producido por paso habilitado o inhabilitado”. El inciso final del artículo 69 recién citado establece que una vez cumplida la pena impuesta en los casos precedentemente señalados, los extranjeros serán expulsados del territorio nacional.

Por su parte, los artículos 78 del Decreto Ley N° 1094 y 158 del Decreto N° 597, en lo pertinente, señalan que el Ministro del Interior o Intendencia Regional, podrán desistirse de la denuncia o requerimiento, caso en el cual la responsabilidad penal se extingue, debiendo dictarse por el juez penal competente el sobreseimiento definitivo y disponer la inmediata libertad de los detenidos o reos.

TERCERO: Que, sin perjuicio de lo anterior, existe la facultad administrativa de expulsión de las personas que no cuenten con un ingreso regular. En efecto, conforme a las facultades delegadas a los intendentes mediante Decreto N° 818 del Ministerio del Interior, estos pueden disponer la medida de expulsión a: a) b) Los extranjeros infractores al artículo N° 146 del D.S. 597 de 1984, con respecto a los



cuales el Intendente Regional respectivo haya obrado previamente conforme a lo dispuesto en el artículo N°158 del decreto supremo en referencia , cuyo es precisamente el caso del amparado, de modo que el actuar del Intendente Regional del Biobío lo ha sido en la esfera de sus atribuciones y en ejercicio de las facultades que conforme a la Ley de extranjería y su reglamento se le han otorgado. En efecto el artículo 146 b) del citado reglamento considera precisamente la situación de ingreso clandestino al país - reconocida en el caso de autos por el propio amparado, según consta del Informe Policial N° 21 que antecedente y sirve de fundamento a la resolución 209- por lo que no se ha incurrido en el acto que se pretende impugnar en ninguna ilegalidad al proceder a expulsar al amparado, quien no ha dado cumplimiento a las exigencias que el Estado impone a los extranjeros, independientemente de su nacionalidad, para entrar legalmente al territorio, más aún cuando este ingreso se ha producido a través de un paso no habilitado, todo lo cual se encuentra debidamente explicitado en los motivos de la mentada resolución.

CUARTO: Que, la referida facultad administrativa se encuentra ratificada por el artículo 17 del D.L. N° 1.094, así como la letra g) del artículo 2 de la Ley N° 19.175, normas que establecen la procedencia de la expulsión en los casos de ingreso clandestino, precisando que corresponde ejercerla al Intendente Regional, por lo que debe necesariamente debe concluirse que la resolución atacada ha sido dictada por autoridad competente, en uso de sus facultades legales y debidamente fundamentada, razón por la que, no existe la vulneración de derechos denunciada respecto del amparado.

QUINTO: Que, en cuanto a la proporcionalidad de la medida adoptada, aparece ésta ajustada a la entidad de la infracción, máxime si del mérito de los antecedentes expuestos por el propio recurrente -mismos que sirven de sustento al acto cuestionado- se advierte que el amparado ingresó de manera clandestina a Chile, en el año 2020 y



hasta la fecha no existe ninguna gestión de su parte encaminada a obtener la regularización de su situación migratoria ante los organismos correspondientes, lo que perfectamente pudo realizar de oficio, por tratarse de un procedimiento desformalizado, pudiendo aportar probanzas para que la autoridad administrativa tuviera un conocimiento acabado y así, con la debida ponderación de todas las circunstancias fácticas, procediera a ejercer las facultades legales y reglamentarias que le confiere la normativa en la materia.

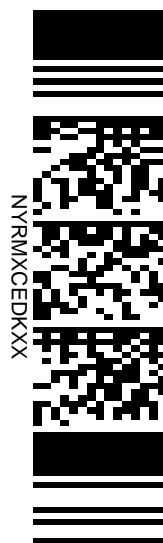
En tal escenario, la resolución impugnada se ajusta a derecho lo que conduce al rechazo de la acción constitucional intentada.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, **se rechaza** la acción constitucional de amparo interpuesto por don Pablo Millán Barría en favor de don Alexander Castillo Ereu y en contra de la Delegación Presidencial de la Región del Bío Bío.

Redactó el fallo la ministra suplente Claudia Vilches Toro.

Regístrese, comuníquese y archívese.

NºAmparo-527-2022.



Pronunciado por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción integrada por los Ministros (as) Claudio Gutierrez G., Gonzalo Rojas M. y Ministra Suplente Claudia Andrea Vilches T. Concepcion, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.

En Concepcion, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

